



DERECHOS HUMANOS

A TIRONES CON EL INFORME RETTIG

Respuesta del Ejército y la Armada deja en punto muerto el precario avance hacia la reconciliación.



Conclusión del Ejército: nada de qué arrepentirse; nada por qué pedir perdón.

Armada. En definitiva, ambas ramas rechazan esta verdad, le niegan verosimilitud y validez histórica. Nada de qué arrepentirse. Nada por qué pedir perdón.

Y el asunto, oficialmente, se clausura aquí. El gobierno, tras analizar la respuesta uniformada, ratificó su parecer de que «la verdad de los hechos entregados por la Comisión Rettig sigue siendo incontrovertida». Pero, matizó al señalar: «cada uno puede defender su propia interpretación de las causas, pero el gobierno coincide en que esas cosas pueden explicar pero no justificar las violaciones a los derechos humanos». Por último, se pone fin al debate con un mensaje casi ecuménico, «ahora cada uno debe cumplir su tarea, ojalá reconociendo cada quien su parte de responsabilidad en la tragedia que vivimos».

CUESTIÓN DE ESTRATEGIA

De esta forma se asiste a un intento de punto final que se instala en la base misma de la compleja y estrecha transición que vive el país. Porque el desarrollo de este tema toca las fibras más delicadas del proceso político nacional. Por encima de cualquier otro problema éste, de los derechos humanos, hace temblar todo el andamiaje de la estrategia gobiernista. Para las autoridades democráticas la gran idea ordenadora de todo su accionar es el cuidar la institucionalidad. Impedir que la fragilidad de una democracia aún convaleciente se vea expuesta a peligros mayores. Así todo se subordina a este objetivo. Y, no hace falta demasiada perspicacia, el riesgo más temido proviene, precisamente, de quienes son los acusados de violar «sistemática y masivamente» los derechos humanos más elementales de muchos chilenos. Aquí está el núcleo de todo el asunto, y eso lo saben los militares y lo resienten los responsables del gobierno.

A fin de cuentas, la transición ha caminado por ese sendero desde su inicio. El poder, inútil resulta negarlo, no pertenece en exclusiva a quienes representan la voluntad mayoritaria de la nación.

Una porción importante de él está, por lo menos, en disputa, y la compleja operación de traspaso de aquellas cuotas que aún retiene el viejo orden no se ha completado. Eso ha quedado en evidencia.

La pregunta que martilla en distintos sectores políticos es si había más alternativas. Si el gobierno estaba en condiciones de «imponer» con más fuerza la verdad que emanó desde la Comisión Verdad y Reconciliación que él mismo creara y que, de ser aceptables los resultados de las encuestas, acepta y reconoce la inmensa mayoría de los ciudadanos. Revisadas todas las declaraciones de los diferentes partidos y organizaciones sociales, la duda no encuentra solución. Para algunos existen reservas no tocadas que permitirían un accionar más decidido y contundente. Para otros, se ha estado actuando en los límites mismos de la prudencia y dar otros pasos podría ser un accionar irresponsable.

Los hechos hablan, además, de una derecha que se equilibra entre sus deseos de abrir paso al futuro y el apego a las lealtades del pasado. Más evidente es el caso de la UDI que, de una primera actitud de repliegue y sumatoria a la petición de perdón a las víctimas, ha pasado a un rechazo sustantivo del informe Rettig: «Cada vez se hace más evidente que el informe Rettig no es la verdad completa, no es la verdad equilibrada, ni es la verdad buscada en profundidad». Más cauta, Renovación Nacional optó por compartir el análisis previo al 73 que hizo el Ejército, pero ratificó su rechazo a las violaciones a los derechos humanos. Sin embargo, la suma de ambas actitudes no sirve para dirimir el conflicto de poder, sino que deja en pie las dudas.

HILOS DELGADOS

Para las víctimas el resultado ha sido más bien amargo. De alguna manera ellas esperaban que el Informe Rettig, más allá de su valor intrínseco, provocara algún tipo de gesto positivo de parte de quienes violaron los derechos de sus

Ya lo había advertido el ex secretario general de gobierno anterior, coronel (r) Cristián Labbé: «la respuesta del Ejército tendrá que estar rodeada de simbolismos». Y, así fue. Tras el acto casi protocolar que significó la reunión del Consejo de Seguridad Nacional, Pinochet se rodeó de toda la pompa posible para, desde la Escuela Militar, ejecutar su parte del guión profusamente anunciado y meticulosamente preparado. La verdad, no fue ninguna sorpresa su discurso. Ya los generales retirados, los voceros oficiosos (entre ellos el propio Labbé) y el mismísimo Manuel Contreras habían «adelantado» el tono y contenido de la respuesta al Informe Rettig. Otro tanto, aunque con un formato más elegante y respetuoso, hizo la

familiares. Eso no ocurrió. Tampoco están satisfechas con el proyecto de reparación impulsado por el gobierno (ver entrevista sobre el tema). En el fondo, sienten que son la parte delgada de los hilos estratégicos y eso, en su concepto, es injusto y doloroso.

El presidente del Senado, Gabriel Valdés, enfatizó la necesidad de poner la vista en el futuro. Y esa opinión parece ser dominante en las esferas de gobierno. Sin embargo, quedan interrogantes, expresadas en diferentes sectores, sobre la factibilidad de poder entrar, en este tema, con plenitud mirando hacia el horizonte. Es verdad que la cautela y la prudencia han puesto en clara salvaguardia los riesgos de desestabilización más temidos. A pesar de su dureza, las declaraciones del Ejército y la Marina reconocen con claridad su respeto al Presidente de la República y su apego a la normativa institucional. Pero, una suerte de frustración también recorre un amplio sector de la Opinión Pública. Y ella nace, especialmente, de la negativa total y cerrada a reconocer errores de parte de los principales «acusados».

En suma, las cartas quedaron todas sobre la mesa, y el juego no dio ganadores. Una vez más la frase tantas veces repetida de que «la historia juzgará» quedó como el corolario implacable de la «tragedia que vivimos», pero parece completamente incapaz de ser el cierre efectivo de un conflicto cuyas heridas permanecen expuestas.

Tal vez un buen resumen de todo este episodio lo constituyen los párrafos finales de una declaración del senador, y miembro de la Comisión de Defensa de la Cámara Alta, Jaime Gazmuri, en respuesta al comunicado del Ejército:

«La declaración (del Ejército) no entregó lo que el país esperaba. Es decir, una certeza de que nunca más, por ninguna razón, se volverán a repetir los hechos denunciados por el informe Rettig y que nunca más el Ejército chileno permitirá que elementos de sus filas violen los derechos humanos... Sin embargo, creo que no debemos desmoralizarnos. Desde el principio sabíamos que la reconciliación entre los chilenos y el restablecimiento pleno de una sociedad y un estado democráticos era un camino difícil. Confío en que la voluntad mayoritaria de los chilenos conseguirá finalmente ambos objetivos».

FELIPE POZO

SIN ANESTESIA
por MICO

